

## "Movimiento estudiantil en Chile: Lucha, participación y democracia"<sup>1</sup>



Fernando Marcelo de la Cuadra<sup>2</sup>

**L**a comunicación a ser presentada pretende hacer un examen analítico del conflicto social y de los movimientos sociales en Chile, durante el gobierno de Michelle Bachelet (autodenominado de gobierno de la ciudadanía). Para eso escogemos un caso emblemático de este fenómeno que ha sido bautizado como la “revolución de los pingüinos”. Una hipótesis sustentada por el autor, considera que la lucha y la movilización de los estudiantes puede representar una interesante perspectiva de movimiento contra-hegemónico, en el cual las formas de la sociedad civil organizada se asumen como constructoras de mayores espacios de debate y participación democrática en la sociedad chilena.

**Palabras-Clave:** Movimiento estudiantil; luchas sociales; democracia participativa.

---

<sup>1</sup> Comunicación presentada en el Seminário Latinoamericano de Pós-graduação em Ciências Sociais, 24 – 26 de junio de 2008, Escuela de Servicio Social, Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil. Traducción: Alexander Panéz Pinto

<sup>2</sup> Candidato a Doctor en Ciencias Sociales. Programa de Postgraduación de Ciencias Sociales en Desarrollo Agricultura y Sociedad de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ), Brasil. E-mail: fmdelacuadra@gmail.com

## **1. La democracia minimalista de la *Concertación***

La llegada al poder en 1990 del primer gobierno de la *Concertación de Partidos por la Democracia (CPD)* se hace después de 17 años de dictadura militar. Entretanto, la transición democrática no se dio en ningún contexto de crisis económica –como en el caso de otros países de la región- y el nuevo gobierno que tomó posesión en ese año, heredó no solamente una gran masa de excluidos dejada por el modelo económico neoliberal implementado de forma pionera por los militares, sino también quedó rehén de una serie de restricciones institucionales impuestas por la Constitución vigente y aprobada en plena dictadura (1980), así como de la existencia de enclaves autoritarios presentes en el propio sistema político. A saber: senadores designados, sistema electoral binominal, Consejo de defensa del Estado, inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, etc.

O sea, aunque Chile no presentase, *stricto sensu*, problemas de gobernabilidad (legitimidad, eficacia e eficiencia), mostraba los límites impuestos por lo tipo de pasaje emprendido, llamado de transición pactada. Este tipo de transición representó la consagración de una política de negociación de “consensos” que llevó a los diversos actores políticos a la búsqueda de acuerdos puntuales sobre temáticas específicas y de forma muy gradual, negando, en tanto, el espacio para la discusión de aspectos substantivos para la construcción de una democracia plena.

Por tanto, ya desde los inicios de la transición democrática, quedó en evidencia la timidez por parte de algunos sectores democráticos en desmontar la estructura institucional y la Constitución heredada de los militares. Esta actitud tendría su origen en el “aprendizaje traumático” de la clase política chilena, que optó por una salida negociada e instrumental, libre de las dimensiones de confrontación del pasado. La síntesis del ideario según el cual debe avanzarse para la plena democracia en forma “lenta y gradual” (como acostumbraban afirmar los generales brasileños) obedeció a una actitud negativamente negociadora en la cual se está, finalmente, dispuesto a abdicar de valores caros a la democracia, tales como la representación de las minorías, participación amplia de la ciudadanía, subordinación de las fuerzas armadas al poder civil, etc. Ese estilo de hacer

política -según los términos definidos por la transición- y que procura finalmente la consagración de acuerdos armónicos y ordenados, recibió el nombre de democracia de los consensos.

La aversión de un enfrentamiento a la aplicación de un nuevo proyecto nacional contribuyó poderosamente para no impulsar desde el comienzo del gobierno Aylwin, aquellas reformas constitucionales necesarias para superar los enclaves autoritarios. Así, la *Concertación* decidió superar las "heridas" del pasado para dedicarse a la tarea de construir una nueva nación, sustentada en los valores de la reconciliación y el perdón, tal y como venía siendo sugerido por algunos sectores de la Iglesia Católica.

Los diversos gobiernos de la CPD incorporaron no solamente esta agenda de conciliación y reencuentro, sino que consagraron también un proyecto minimalista de pequeñas transformaciones económicas, políticas y sociales para el país. En su totalidad, el proyecto neoliberal casi no fue alterado, salvo algunas acciones específicas y puntuales, que le conceden un papel de mayor relevancia al Estado. En pocas palabras, podría decirse que los gobiernos de la CPD han marcado una continuidad con relación a los hechos del gobierno militar, principalmente en materia económica: mantención de los equilibrios macroeconómicos, estabilización monetaria, generación de superávit fiscal, apertura para el exterior, aprovechamiento de las ventajas comparativas, flexibilización del trabajo, etc.

En el ámbito político, sobresale la vigencia de la Constitución promulgada en plena fase dictatorial (1980) y la existencia del sistema binominal por el cual se institucionaliza la ausencia de representación de los partidos de menor tamaño. Si bien la actual mandataria ha señalado la posibilidad de convocar un plebiscito para dirimir este problema que arrastra la democracia, hasta ahora no se vislumbran los términos concretos en los cuales se realizaría este plebiscito ni los plazos establecidos en la agenda del gobierno.

Con respecto a la esfera de las políticas sociales, los últimos gobiernos de la CPD tampoco ha respondido a las grandes expectativas que tenía la mayoría del pueblo chileno. Si bien el

gasto social aumentó en los últimos cinco años, él se orienta por el principio de la focalización del gasto, manteniendo una parte importante del funcionamiento del sector educación, salud, previsión, vivienda y servicios sociales en general, en manos del sector privado, reforzando el carácter neoliberal de tales políticas, que por último, sólo van a sufrir cambios visando su maximización y no para proceder a su reestructuración.<sup>3</sup>

A falta de resolución de los problemas sociales y especialmente de la persistencia de la desigualdad social y el vacío dejado por los gobiernos concertacionistas, creó un hecho tanto paradójico cuanto inédito: conseguir a hazaña de poner en las manos de la derecha el levantamiento de la bandera de la justicia social como su principal propuesta para el país. Por su parte, es precisamente el fracaso demostrado por los gobiernos de la Concertación para superar los problemas de desigualdad que finalmente acabó convocando y movilizándolo a los estudiantes secundarios, en una primera señal de alerta para el gobierno Bachelet.

## **2. La marcha de los pingüinos: una breve historia**

Entre los conflictos sociales enfrentados por el nuevo gobierno bajo la presidencia de Michelle Bachelet, el generado por el movimiento estudiantil secundario es, sin duda, el más significativo. En el período de la transición democrática iniciada en 1990, el movimiento estudiantil secundario se abocó principalmente a la tarea de reconstruir sus centros de alumnos en el interior de los establecimientos educacionales, debido al férreo control ejercido sobre estos por las autoridades de los Liceos en los años de la dictadura militar. Pero esa reconstrucción no venía de cero. Dicho movimiento evidenció bastante vitalidad en los años de la mayor represión del régimen de Pinochet, acumulando una rica experiencia de participación en el proceso de lucha por la recuperación de la democracia en el país.

---

<sup>3</sup> Respecto de este tema se puede consultar: Moulian, 2006; Sant´anna, 2006 o Steinsleger, 2006

Después de algunas manifestaciones de cierta consideración en los últimos años del gobierno Lagos, los estudiantes secundarios iniciaron, en el final de abril, marchas y protestas por la gratuidad del pase escolar y por la disminución del valor de inscripción de la Prueba de Selección Universitaria (PSU). en el inicio de las movilizaciones se calcula que participaron 10 mil estudiantes. Ante este escenario, el gobierno reaccionó de la peor forma: comenzó a descalificar a sus artífices. El conjunto de actitudes y actos del gobierno tornó evidente su falta de tino y asertividad para enfrentar el conflicto. Miembros del gobierno definieron estas movilizaciones como el producto de mentes alucinadas o inmaduras de jóvenes rebeldes y que las sucesivas convocatorias sólo serían acatadas por un grupo bien minoritario. No sólo desconocieron la legitimidad de las reivindicaciones de los estudiantes, pero también criminalizaron sus actos, llamándolos de vándalos y violentos, discurso que fue ampliamente difundido y apoyado por la prensa conservadora. A partir de ese examen, se crearon las condiciones para justificar la acción de las fuerzas policiales que reprimieron ferozmente las manifestaciones callejeras, con el consentimiento o la omisión del ejecutivo. De este modo, el diagnóstico que hacían las autoridades, y que amplificaban los medios de comunicación, era que se estaba frente a un movimiento estudiantil donde se alzaban movilizaciones con la excusa de delinquir (los encapuchados) y cuyos dirigentes estaban sin capacidad de organización y legitimidad para detener los actos de violencia producidos en las principales ciudades. Después de 10 días de manifestaciones masivas y del recrudecimiento de la represión policial, con cientos de estudiantes detenidos, el conflicto explotó en el interior del gobierno, que como medida de emergencia buscando salir de la crisis determinó el alejamiento del Jefe de la Policía Metropolitana.

Durante el transcurso del mes de mayo los estudiantes cambiaron de táctica. en el inicio de ese mes las movilizaciones se realizaban en la calle, pero debido al desorden creciente y principalmente al gran número de heridos y detenidos, la Asamblea de los estudiantes resolvió pasar a ocupar los recintos educacionales. De esta forma, el movimiento cobra inusitada fuerza y los alumnos paralizan sus actividades escolares, con más de 100 mil alumnos entrando en paro y en torno de 100 colegios tomados. Según informaciones de la prensa, en fines de ese mes la rebelión de los jóvenes se extiende por todo el país y va agregando también el apoyo de otros sectores (estudiantes universitarios, profesores, profesionales) llegando a movilizar aproximadamente un millón de personas,

en la mayor protesta estudiantil de que se tiene memoria en los últimos años.<sup>4</sup> Finalmente, y debido al fracaso en las conversaciones con el gobierno los estudiantes deciden convocar a una jornada de paralización nacional para comienzos de junio (día 5), las cuales se sumaron los estudiantes universitarios, Sindicato de Profesores, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (CONFENATS), Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos e otras organizaciones sociales y de trabajadores.

En ese momento se produce una virada estratégica en las demandas de los estudiantes. en la medida en que el conflicto comenzó a arrastrarse por el país y que nuevos actores fueron sumándose al movimiento, las demandas se ampliaron en pro de reformas de carácter estructural, como la reformulación de la Jornada Escolar Completa (JEC) y la extinción de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) promulgada (literalmente) en el último día del régimen militar (10/03/90). Esta ley permitió, entre otras cosas, que la educación estatal fuese traspasada de los Liceos públicos, bajo control del gobierno central capaz de mantener buena calidad de la enseñanza, para los municipios. La ineficacia y la falta de recursos demostrada por los gobiernos locales actúan directamente en detrimento de la calidad de la enseñanza de las escuelas municipales, frente, sobretudo, de los colegios privados. Por ese motivo, uno de los principales slogans que surgió en el calor de las movilizaciones fue: “exigimos mayor intervención del Estado en el sistema de educación, la educación es un derecho y no un privilegio.” Él representa claramente el apelo de los estudiantes por una educación gratuita y de calidad, visto la enorme brecha entre la enseñanza privada y lo municipal.

La relevancia y dimensión incremental adquirida por las protestas colocaron en jaque el gobierno, teniendo este finalmente que negociar con los “revoltosos” y convidarlos a participar en la formación de un “Consejo Asesor Presidencial para la calidad de la Educación”, el cual tuvo por objetivo elaborar una propuesta que conciliase los diversos sectores en conflicto, evaluando la pertinencia de hacer cambios en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Este Consejo fue integrado por 74 miembros, siendo que 12 de ellos fueron representantes de los estudiantes. Entretanto, como fue expuesto en su

---

<sup>4</sup> Cifras elaboradas y consignadas por José Seoane e Clara Algranati a partir de informaciones de la prensa

oportunidad por un dirigente de los secundarios: “En torno de un 70 por ciento de los miembros “adultos” del Consejo no comparte nuestras ideas”. (Chilevisión, 11/06/06). Este Consejo también fue cuestionado en repetidas oportunidades tanto por los alumnos como por otros sectores de la sociedad, en parte, por el excesivo número de miembros que comprometió su capacidad operativa, pero, sobretodo, por la desidia e indolencia con que muchos integrantes de la Comisión enfrentaron los trabajos necesarios para elaborar la propuesta final.

En parte por esa falta de compromiso de muchos miembros del Consejo, afectando el desempeño de este, y, especialmente por la ausencia de perspectiva con relación al documento final del Consejo, los estudiantes comenzaron a movilizarse nuevamente en el mes de octubre, días después que se dio a conocer el informe de avance del Consejo. Este segundo brote de agitación secundaria, se debió (en palabras de los dirigentes) al descontento que provocó entre los estudiantes la falta de progreso en las propuestas. En tanto, la táctica utilizada en mayo, que consistía fundamentalmente en la ocupación (toma) de los establecimientos educacionales, tuvo que ser revertida por la fuerza de los hechos. La segunda ola de protestas fue marcada por lo ingreso de las fuerzas policiales en los liceos y colegios y el desalojamiento de los alumnos. Muchos fueron detenidos, amenazados o expulsados de los colegios, ante lo cual la Asamblea de estudiantes determinó nuevamente ocupar las calles para expresar sus demandas. Esta mudanza de táctica tuvo consecuencias inmediatas en torno al grado de confrontación generado entre los estudiantes y las “fuerzas del orden”, reiterándose las escenas de violencia y de represión ya advertidas en mayo.

Finalmente, días antes de salir a la luz el informe final de esta Comisión especial, los estudiantes secundarios – luego seguidos por los estudiantes universitarios y profesores - decidieron “*bajarse*” del documento, quiere decir, no firmar la versión final que sería entregada a la Presidenta Bachelet en el día 11 de diciembre. El argumento es simple y directo: los alumnos no se sienten representados por los resultados expuestos en el texto final, que según ellos, acaba por consagrar la visión mercantil de la educación.

Durante el curso del presente año de 2008, los estudiantes han retomado las movilizaciones. Ellas comenzaron en el mes de abril y continúan hasta el momento de escribir estas líneas (junio). Después de realizar la ocupación de aproximadamente 200 liceos, colegios y universidades, ahora los estudiantes decidieron tomarse la sede central de dos partidos que conforman la Concertación (PPD y PS). La medida fue realizada un día después que el gobierno desocupara 40 establecimientos educacionales y repusiera en la agenda legislativa la urgencia para su aprobación en la cámara de Diputados de la Ley General de Educación (LGE).

El portavoz de la Federación de estudiantes de la Universidad de Chile, afirmó que esta ha sido “una ocupación pacífica y temporal con pocas personas”. Con esta medida, los jóvenes rechazaron el pacto entre la Concertación y los partidos de derecha (congregados en la Alianza por Chile), que dio vida a la LGE y presionaron a los partidos cuyas sedes fueron ocupadas para que se pronunciasen a favor de sus exigencias. “Nuestros reclamos son por una educación pública gratuita en todos los niveles, fin a la municipalización, eliminación de la educación (privada) subvencionada, y co-gobierno efectivo”, informaron los estudiantes en un comunicado.

### **3. Buscando entender la réplica del gobierno**

La explosión de las movilizaciones estudiantiles que se iniciaron en el mes de abril, continuadas en Mayo y reactivadas en octubre, colocó en cuestión la capacidad de la recién asumida administración de lidiar con el conflicto, siendo que en primera instancia la reacción del gobierno fue la de negar el conflicto y atribuirle un carácter más bien de expresión natural de rebeldía de la “muchachada”, que se extinguiría también naturalmente con el pasar de los días. En tanto, como es casi unanimidad en los días de hoy, el tono displicente de la autoridad y el especial trato que dio a los estudiantes secundarios (niños sin experiencia), se cristalizó finalmente en una errática combinación de política represiva y paternalista, provocando, como se sabe, el efecto contrario de lo esperado: su crecimiento.



Por tanto, la aversión expresada por la recién ingresada administración de lidiar con su primer conflicto, derivó finalmente en su negación. La tesis del apaciguamiento del conflicto a través de causas naturales y su posterior olvido por parte de los estudiantes y de la comunidad nacional, hizo que el gobierno en lugar de asumir la iniciativa y recoger las reivindicaciones estudiantiles, quedase esperando que este se resolviese por si mismo, como si aquí también pudiese operar la “auto-regulación” del mercado.

Expuestas las medidas tomadas por las autoridades para responder a estas movilizaciones, surge inmediatamente la siguiente pregunta: ***¿Por qué un gobierno socialista que se sustenta en el discurso de la ciudadanía y de la participación acabó reprimiendo con violencia policial a los estudiantes?*** ¿Qué explica esa especie de parálisis decisoria que tuvo el gobierno con relación a un conflicto ya declarado? ¿Cómo es que diversas autoridades enfrentaron el conflicto suscitado de manera tan errática? A continuación intentaremos responder estas preguntas a partir de la formulación de algunas claves explicativas que nos permitan entender, aunque tentativamente, la conducta asumida por las autoridades:

### **3.1. A brecha generacional**

Una primera y más obvia indicación que podemos obtener de la respuesta del gobierno ante las expresiones del movimiento secundario, es que la forma de comprender el conflicto por parte del gobierno, revela una profunda brecha de concepciones y visiones de mundo entre las autoridades, las instancias decisorias de políticas públicas y los estudiantes, que se traduce en la negación de la calidad de sujetos políticos y de interlocutores válidos por parte de los secundarios y con eso la incapacidad para entender la acción colectiva por ellos emprendida.

Esta incapacidad demostrada por las autoridades del gobierno y por la clase política no es exclusividad de ellos. Esta percepción de los jóvenes como “chiquillos” que gustan de provocar ruido es también compartida por otros sectores de la sociedad nacional. Si bien

los jóvenes desempeñaron un papel importante en las luchas por la democratización del país, a través de innumerables manifestaciones y protestas, en la fase de transición democrática este sector fue estigmatizado por parte importante de la sociedad chilena como un ente pasivo y apático. De esta manera, viró un lugar común decir que los jóvenes de la era Pos-Pinochet era un grupo de sujetos que “no estaban ni ahí” con lo que acontecía en el país y no demostraba ningún interés por las cuestiones sociales y por participar en los asuntos políticos. El indicador indiscutible de tal aseveración era la expresiva cantidad de jóvenes que no estaban inscritos en los registros electorales: un millón y medio de jóvenes, que representaban casi el 70% del electorado con menos de 25 años (18-25).

La constatación estadística del desinterés electoral fue leída como sintomática de la indiferencia política que encarnaban estos jóvenes, y diversos sectores sociales y políticos consideraron que la solución para el problema de la participación estaría en la alteración (inversión) del sistema hasta ahora vigente, quiere decir, hacer la inscripción en los registros electorales de forma automática (en el momento de obtener la cédula de identidad) y transformar el sufragio en un acto voluntario. Si los jóvenes están inscritos, la lógica indica que ellos van a comparecer al sufragio por una especie de inercia ciudadana. Otra lectura de esta apatía juvenil fue interpretar que la propia rebeldía sintomática de esta fase de la vida, se encontraba sumergida en el apelo a conductas que procuran el placer individual o de grupos pequeños (el llamado hedonismo de la vida contemporánea).

En tanto, por otra parte, se sabía que esta abulia era sólo aparente y diversos estudios empíricos demostraban que los jóvenes si querían participar, más no se encontraban interpretados por los partidos políticos y por la clase política en general. (Estudio INJUV) La ausencia de inscripción en los registros no es un fiel reflejo de “estado de espíritu” de los jóvenes, pero si una forma de expresar el descontento con la forma en que la clase política y los partidos han conducido el proceso de transición democrática.

### **3.2. La perspectiva economicista**

Una segunda perspectiva de análisis sobre la replica de las autoridades, se sitúa en torno a la dimensión económica del problema. Quiere decir, para los funcionarios del gobierno la emergencia del conflicto se debería principalmente a la ineficiente e imperfecta asignación de recursos destinados para la educación, o sea, en la deficitaria relación costo/beneficio. Para los economistas defensores de esta idea, el gobierno debería maximizar el uso de los recursos asignados en la ejecución de la política social y dentro ella en educación, de forma que el resultado de la matriz insumo/producto sea siempre positivo. El criterio general que orienta este punto de vista es que los alumnos son concebidos como un *output* del sistema, el producto necesario en términos de formación profesional y capacidades técnicas, de manera que esos futuros trabajadores calificados posibiliten que nuestras empresas sean más eficientes y capacitadas para competir en mejores condiciones en los mercados internacionales.

A partir de ese marco de análisis, el problema radicaría en la mala definición de los criterios para conferir los subsidios a las escuelas municipales y a los colegios particulares subvencionados, como de las formas de control sobre el uso de esos recursos. También estarían explicando el conflicto, los errores cometidos en la designación y entrega de los créditos y becas de estudios a los estudiantes de las universidades, que también se sumaron a las manifestaciones. La solución surge entonces casi simultáneamente como el diagnóstico. Si el problema reside en la mejor asignación de los recursos, el Estado debe velar para que el uso de los fondos públicos destinados a la educación sean bien gastados y para eso es preciso mejorar tanto las formas de transferencia de los recursos cuanto los métodos de fiscalización y monitoramiento del presupuesto destinado a la política sectorial de educación.

Una crítica de la visión economicista ha sido sustentada por lo filósofo Humberto Maturana. Dicha lectura llevó precisamente a que ciertas autoridades enfrentasen el conflicto como un tema fundamentalmente económico, como un tema de inversión y producto. Esto, según él, representa una perspectiva reduccionista y completamente falaz.

Por el contrario, la revolución de los pingüinos tiene que ver con el dolor espiritual por la falta de sentido que la educación formal entregada a los jóvenes. Así, el factor fundamental que explicaría esta revolución de los jóvenes se encontraría en el rechazo de un modelo educativo que refleja una visión de país individualista y fragmentada. La rebelión surge precisamente porque el sistema educativo concebido durante la dictadura, resalta el carácter mercantil de la educación. En una comunidad no son los intereses personales los que prevalecen, sino la participación en la creación de un mundo común. En libre mercado lo que prima son los intereses personales. Eso sería rechazado por los jóvenes que buscan un sentido para sus vidas, creer en un proyecto País, “en que todos se sientan partícipes de la creación de una nación donde sea deseable, digno y creativo vivir.” (La Nación, 09/06/2006).

### **3.3. Hiper-gobernabilidad: una señal de los nuevos tiempos?**

Una última tentativa de explicar la falta de asertividad en la respuesta del gobierno tiene que ver con lo que a nuestro entender puede llamarse de hiper-gobernabilidad. Esta noción es construida a partir de la idea de que en una “democracia de consensos” no puede haber espacio para el disenso, sobretodo cuando este es expresado por voces no “legitimadas” como interlocutores relevantes. La existencia de experiencias traumáticas en el pasado reciente llevó a que significativos y conspicuos actores de la arena política expresasen que lo mejor es siempre evitar el conflicto, visto que las dichas frágiles democracias que están transitando para su plenitud, pueden ser amenazadas por la existencia de la ingobernabilidad.

La aprensión sentida por el gobierno en la participación y en la explosión de las demandas de los jóvenes puede ser entendida, en gran parte, como un producto del desmedido esmero depositado por el gobierno en torno a la mantención de la gobernabilidad.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Compartiendo esta misma preocupación, el cientista político Daniel Campione sustenta que “toda intervención de ‘masas’ (mismo las de carácter subordinado) es vista como potencialmente peligrosa para la gobernabilidad del sistema, que se percibe como estando ligada a una apatía política que permitiría avanzar rumbo a la utopía del Estado

La gobernabilidad que emerge en este caso, posee más bien un sentido resolutivo. El gobierno se ha dedicado a subrayar que los problemas de la población son en su gran mayoría cubiertos por los órganos competentes de la máquina del Estado. Dando a entender que todas las demandas de la ciudadanía pueden ser resueltas por un gobierno “legítimo y eficiente”, que no requiere movilizaciones de la sociedad civil. En tal caso, para algunos representantes del gobierno - como el Ministro de Hacienda - las presiones realizadas por los movimientos sociales podrían afectar tanto las finanzas públicas como el buen desempeño de la economía, y en consecuencia ejercer un impacto directo sobre el índice de riesgo-país. Así colocada, la cuestión se presenta como una especie de falso dilema entre la satisfacción de necesidades inmediatas y la participación ciudadana, dado que se torna prescindible esta última, una vez que las carencias de la sociedad son detectadas y cuantificadas con anticipación y posteriormente “tratadas” por cuadros técnicos de alta competencia.

Por tanto, la principal preocupación del Estado parece orientarse para la sustentación de la capacidad de gobernar estimulando los movimientos sociales a mantener un bajo perfil en su demanda o acción contestataria. Diferente de la noción conservadora, en este caso no existe ninguna intención explícita de limitar la expresión de dicha demanda, ahora se enfatiza el carácter “impropio” que ella posee, en virtud de la capacidad que tiene la autoridad de anticiparse a las necesidades del pueblo y de esta forma ofrecer las soluciones más rápidas y adecuadas a cada situación particular. Así, el gobierno está premunido de equipos de expertos y de un conjunto de estudios que permiten abordar con efectividad y eficiencia, las carencias y dificultades que atingen a la población. Es la manifestación más perversa de las buenas intenciones. Tal parece que el carácter de la inclusión democrática de la ciudadanía se restringiría a su credencial de “beneficiarios” de programas sociales, donde la dimensión política de esa ciudadanía queda reducida en su apelo social y por esa vía plenamente satisfecha.

Aunque en el discurso oficial el gobierno central reconozca la importancia de la participación ciudadana, en los hechos ella es muy reducida. En el papel, se señala que los ciudadanos deben comparecer activamente en la ejecución de los diversos programas y proyectos, que los sistemas de control y de prestación de cuentas de las autoridades

---

mínimo o Estado modesto, físicamente menos costoso e inmunizado contra el peligro de abrigar organizaciones propensas

representan un componente fundamental de la democracia o que no se puede construir democracia sin la ingerencia de los ciudadanos, pero en la realidad los gobiernos de la Concertación no han estimulado bajo ninguna circunstancia la participación efectiva, - y muchas veces incómoda – de las personas en las diversas arenas donde ella se debe expresar. En rigor, la autoridad ha propiciado el desanimo por parte de los actores para representar sus intereses, basándose para eso en la falsa concepción de que a participación es dispensable.

Existe una especie de gobernabilidad hipertrofiada (o hiper-gobernabilidad) que termina siendo una verdadera armadilla para los apóstoles del “orden institucional”, instalando un énfasis desmedido en el funcionamiento de las instituciones democráticas como garantía del orden social. Consecuentemente, la abdicación del conflicto como parte estructurante de la sociedad y de la política, enuncia sin mayores magias, la desconfianza que alberga el gobierno y sus funcionarios, en la capacidad que poseen las personas y las organizaciones de ejercer con ponderación su derecho a la participación e influir en las decisiones políticas que afectan su propio destino.

#### **4. Reflexiones finales**

¿Cuál es el futuro del movimiento secundario? Es difícil tener certeza sobre esta cuestión, pero es posible si postular que por la forma como el movimiento se ha organizado, sin estructura definida y con un sistema de representación equilibrado y participativo, por la coherencia de sus posturas y por la capacidad demostrada para captar la adhesión de diversos sectores sociales, esta revolución de los pingüinos constituye un importante llamado de atención sobre los caminos recorridos por el modelo económico, político y social impuesto en Chile. Y más todavía, una oportuna remecida en esta especie de situación auto-complaciente en que se encuentra la sociedad chilena. Con banderas de lucha centradas en la calidad de la educación, la agitación estudiantil combinó ocupaciones, paros, marchas, enfrentamientos a una gran capacidad para sumar el apoyo de la ciudadanía a sus demandas.

---

a tornarse anticapitalistas o, por lo menos, perturbar la lógica de la acumulación” (Campione, 2003, p. 58).

Pero los jóvenes hoy también se están rebelando contra el orden social elitista impuesto “desde arriba” y, su movilización no sólo puede ser pensada como una lucha por introducir mejoras en la educación, pero, sobretodo, como una crítica radical al proyecto de país que se viene construyendo. Como acertadamente señalaban los propios estudiantes, la solución a sus demandas no se puede limitar al ámbito de la educación. Cualquier tipo de solución debe partir necesariamente por establecer un cuestionamiento global de la estructura económica, cultural, social y política existente en Chile.

Así, las movilizaciones y demandas expresadas por este grupo de jóvenes que no superan los 18 años pueden representar una forma de lucha contra-hegemónica que no solamente cuestione el modelo educativo mercantil que impera en el país, sino que fundamentalmente pasa a interrogar el conjunto del paradigma neoliberal impuesto por la dictadura y administrado con “éxito” por los sucesivos gobiernos de la *Concertación*.<sup>6</sup>

Por otro lado, la perseverancia mostrada por los estudiantes en participar en la elaboración de propuestas que visan solucionar el problema de la educación, pone en duda no apenas la capacidad gubernamental de resolver la crisis educativa mediante el concurso de “expertos”, como también relocaliza la importancia de la participación política y de la emergencia del conflicto como valores inalienables de la democracia.

Lo que vaya a acontecer de aquí para adelante es una incógnita y todavía el conflicto puede extenderse por mucho tiempo. Pero aún así nos atrevemos a presagiar que la semilla lanzada por este movimiento puede significar el inicio de un proceso germinal de elaboración de una alternativa delante del modelo hegemónico existente, a través de sucesivos cambios moleculares en un escenario de guerra de posición, transformando su lucha particular en un proceso de movilización general que envuelva finalmente al conjunto de la sociedad chilena en la construcción de un nuevo proyecto nacional más equitativo, más inclusivo y más democrático.

---

<sup>6</sup> Y sumando las palabras de Campione “Estamos hoy delante de una situación en que no se trata más de convencer a las personas respecto de la justeza de las luchas, pero de convencerlas de que las luchas son viables y útiles, y pueden ser conducidas de modo a sumar la capacidad de acción autónoma a partir de abajo.” (Campione, 2003, p. 61).

## **BIBLIOGRAFIA**

1. AGUILERA, OSCAR ET ALLI (2006): La rebelión del Coro. Análisis de la movilización de los estudiantes secundarios. Centro de Estudios Socio-culturales (CESC), Santiago.
2. BRUNNER, JOSÉ JOAQUÍN (2006): *Brecha generacional*, en Jornal El Mercurio, Cuaderno Artes y Letras, 11/06/06.
3. CAMPIONE, DANIEL (2003): "Hegemonia e contra-hegemonia na América Latina", em: Carlos Nelson Coutinho (org.) *Ler Gramsci, entender a realidade*, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro.
4. FERRETTI, PEIRINA E MASSARDO, JAIME (2006): "El mayo de los estudiantes secundarios", en el sitio Rebelión, <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=34732>
5. MATURANA, HUMBERTO (2006): "*Los jóvenes buscan darle sentido a sus vidas*", en: Diario La Nación, 09/06/2006.
6. MOULIAN, TOMÁS (2006): "El gobierno de Michelle Bachelet: las perspectivas del cambio", en: Revista Observatorio Social de América Latina (OSAL), Año VI, N° 19, CLACSO, Buenos Aires, pp. 131-135.
7. SANT´ANNA, JULIA (2006): *O que falta de social na socialista Bachelet?*, en: Observador On-Line, vol. 1, N° 7, Septiembre, IUPERJ, Rio de Janeiro, pp. 2-13.
8. SEOANE, JOSÉ E CLARA ALGRANATI (2006) "Los movimientos sociales en la geopolítica continental", en: Revista Observatorio Social de América Latina (OSAL), Año VI, N° 19, CLACSO, Buenos Aires, pp. 109-130.
9. STEINSLEGER, JOSÉ (2006): *Pinochet + concertación = Bachelet*, en el sitio del Diario La Jornada, <http://www.jornada.unam.mx/2006/02/01/026a1pol.php>